



Poder Judicial de la Nación

**CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2**

**CAUSA N°14874/2013**

**AUTOS: DE LA FUENTE CAYETANO LUIS c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS**

Sentencia Interlocutoria

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la resolución de fecha 25 de octubre de 2022 que aprueba en cuanto ha lugar por derecho la liquidación practicada por la actora. Por dicha resolución queda determinado el haber a agosto de 2022 en la suma de \$ 1.305.356,38 y las retroactividades en la suma de \$ 77.425.388,72, monto que surge al deducir del retroactivo total de \$79.777.468,35 las sumas determinadas por la actora como no ingresadas al sistema al liberar el tope del art 25 Ley 24.241, con más interés (\$ 2.352.079,63).

La demandada cuestiona la liquidación aprobada en autos, la intimación cursada bajo apercibimiento de embargo, la devolución de las sumas retenidas en concepto de impuesto a las ganancias, lo dispuesto en materia de costas y apela -por elevados- los honorarios que han sido regulados en favor de la representación letrada de la parte actora.

El letrado del ejecutante sostiene que sus emolumentos han sido regulados por debajo de la escala legal vigente.

En primer lugar, se analizará el memorial interpuesto por el organismo administrativo.

En referencia a la liquidación, la generalidad con que se intenta objetarla no resulta idónea a los fines pretendidos, pues no constituye en modo alguno, una impugnación en los términos del art. 504 del C.P.C.C.N., no habiendo demostrado la existencia de error en los números o aplicación del derecho.

Sobre dicha cuestión se ha dicho que “aprobada la liquidación en cuanto ha lugar por derecho”, la misma no puede revisarse por cualquier causa, sino solamente en la medida que las cuentas ya aprobadas no reflejen aritméticamente el monto de la condena judicial. Tal revisión, por lo tanto, se limita a los errores de cálculo, pero no a los aspectos de fondo que no fueron planteados al momento de sustanciarse la liquidación (conf. C.N. Civ. Sala B, in re Consorcio de Propietarios Cangallo 2285 c/Wedovot, Enrique y otros, del 23-11-95; C.N. Fed. Civ. Y Com. Sala I, causa 1362, del 28-9-90; C. Nac.Cont. adm. Fed. Sala I, C. 24.397/93 “Olmí Goñi, Carlos s/in. Ejec. De sent. del 21-8-96, etc).

A ello cabe agregar respecto a los supuestos errores materiales invocados por la



#26394465#384235169#20231019102239124



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

ejecutada, ésta omite practicar las cuentas que a su juicio son las correctas. La impugnación de una liquidación requiere, para ser examinable el suministro de los cálculos correctos y de cuya comparación surgirá el error. Habiéndose omitido tal recaudo se rechaza el agravio.

Respecto a la retención del impuesto a las ganancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en casos de aristas similares, ver “García Blanco Esteban c/ ANSES s/ reajustes varios” CSS 23339/2009/CS1 sentencia del 6 de mayo de 2021; “García Marta Susana c/ ANSES s/ Reajustes Varios”, sentencia del 10 de septiembre de 2020, “García María Isabel c/ANSES s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26 de marzo de 2019, “Garay Corina Elena c/ANSeS S/Reajustes Varios” Sentencia del 7 de diciembre de 2021, CSS 60858/2009/CA1-CS1, entre otros.

En atención a ello, cuestiones de economía y celeridad procesal obligan a remitirse a dichos fundamentos, confirmándose lo dispuesto en la instancia de grado en cuanto al punto.

En relación al apercibimiento de embargo, no se advierte ningún interés vulnerado de la quejosa que la habilite a exteriorizar el agravio que vierte dado que ello no le provoca perjuicio concreto alguno, ni la coloca en estado de indefensión sino que, por el contrario, para el caso de cumplir con lo ordenado en el término fijado por la magistrada, el apercibimiento devendría abstracto.

Sobre las costas, no corresponde hacer lugar al agravio esgrimido de conformidad con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo “Rueda Orlinda c/ ANSeS s/ ejecución previsional”, sentencia del 15 de abril de 2004, ratificado en autos “Becerra Isolina C/ANSeS s/Ejecución Previsional “. B. 668 XXXVII, sentencia del 15/06/04 y “Patiño Raúl Osvaldo” sentencia del 27/05/09.

En referencia a la cuestión planteada sobre los honorarios regulados en primera instancia, en atención a lo resuelto oportunamente por este Tribunal en los autos: [“SAGO HADEL ILANCO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”](#), expte. 48840/2007 y autos: [“ALDANA JULIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”](#), ambos decisorios de fecha 16 de agosto de 2023, debe estarse a sus fundamentos, a los que nos remitimos en honor a la brevedad.

En consecuencia, tomándose el valor de la UMA que se encontraba vigente al momento de corte de liquidación -en el caso, a la fecha 31/07/2022 la unidad monetaria arancelaria equivalía a \$ 9.811 conforme Acordada C.S.J.N. 25/2022- y de acuerdo al mérito e importancia de las tareas realizadas por la representación letrada de la parte actora en la presente etapa, corresponde elevar sus emolumentos a la cantidad de 492,25 UMA equivalentes a la fecha del dictado de la presente resolución a la suma de \$ 12.489.859,25





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

de conformidad a lo establecido en los arts. 16, 21, 24, 41 y 51 de la ley 27.423, con la adición del IVA en caso de corresponder.

En cuanto a los honorarios de Alzada la aplicación mecánica, lisa y llana del porcentaje establecido en el art. 30 de la ley arancelaria implicaría -en el caso particular de autos- regular emolumentos por la suma de \$ 3.746.830,91 equivalente a la cantidad de 147,67 UMA con más el I.V.A. (en caso de corresponder), resultado desproporcionado con la tarea profesional que fuera cumplida en esta instancia (a saber: presentación del escrito de contestación de agravios incorporada digitalmente en línea de actuaciones el 3 de febrero de 2023).

Las disposiciones del art. 30 de la ley 27.423 deben ser interpretadas en relación con las disposiciones del art. 16 de la citada norma, tanto en lo que respecta al último párrafo en cuanto prescribe: “Los jueces no podrán apartarse de los mínimos establecidos en la presente ley, los cuales revisten carácter de orden público” como todas las restantes pautas valorativas expresamente previstas en el art. 16.

Entre las pautas legales obviamente se encuentra el monto del asunto (inc. a) pero así también otras situaciones objetivas y subjetivas que deben valorarse por parte del juez (labor desarrollada, complejidad y novedad de la cuestión planteada, responsabilidad para el profesional, resultado obtenido, trascendencia jurídica, económica y moral) que proveen un conjunto de principios generales que conforman una guía a observar para lograr una estimación justa y razonable de los emolumentos profesionales (en tal sentido ver C.S.J.N., Fallos, 302:534, 306:1265, 307:93, 311:1870, 318:1571).

Corresponde recordar que, la interpretación de la ley debe evitar asignar a las normas un sentido que ponga en juego sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 143:118; 307:2070; 310:195; 344:2835; entre muchos otros).

En este sentido, a mayor abundamiento, lo dispuesto por el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que: “si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución”, debiéndose adecuar el estipendio a su justa medida, en tanto debe existir una proporción razonable en relación al monto en juego y a la labor efectivamente desplegada (CSJN, Fallos, 265:227; 310:1040; CNCom, Sala A, 19/5/2021, “Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Zimil Ltda. c/Winniczek, Ruth Haydee s/elec.”; íd., Sala F, 28/10/2020, “Credi Full SA c/Garibotti, Graciela Beatriz s/elec.”, entre muchos otros).

Por todo ello, analizando las particularidades del caso y valorando la extensión del desempeño profesional del Dr. Adrián Antonio Troccoli T° 71 F° 731 en esta instancia,





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

resulta adecuado regular sus honorarios en el 15 % de la cantidad fijada por su labor en primera instancia, es decir, en la suma de \$ 1.873.478,88 equivalente a la cantidad de 73,83 UMA, con más el IVA en caso de corresponder (conf. art. 1255 del C.C.C.N., art.16, 21, 22, 29, 41 y cctes. de la ley 27.423 y Resolución CSJN 2722/23).

Por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1º) Elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora a la cantidad de 492,25 UMA, equivalentes a la fecha del dictado de la presente resolución a la suma de \$ 12.489.859,25 con más el I.V.A. en caso de corresponder; 2º) Confirmar la resolución apelada en lo demás que decide y ha sido materia de agravios; 3º) Costas de Alzada a la demandada vencida (art.68 del C.P.C.C.N.); 4º) Regular los honorarios del Dr. Adrián Antonio Troccoli Tº 71 Folio 731 por su actuación en la Alzada en el 15 % de la cantidad fijada por su labor en primera instancia, es decir, en la suma de \$ 1.873.478,88 equivalente la cantidad de 73,83 UMA, con más el IVA en caso de corresponder (conf. art. 1255 del C.C. y C.N., art.16, 21, 22, 29, 41, 51 y cctes de la ley 27.423 y Resolución C.S.J.N. 2722/23) y 4º) Devolver las actuaciones al juzgado de origen a sus efectos.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

SMC



#26394465#384235169#20231019102239124